



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Claudia Estella Monsalve Duque
DEMANDADO	Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-
RADICADO	05-001-31-05- 013-2018-00477
TEMA	Apelación costas procesales
DECISIÓN	Confirma auto recurrido

El doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ordinario, promovido por **CLAUDIA ESTELLA MONSALVE DUQUE** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES-**, procede a resolver lo pertinente.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 041**, aprobada por los integrantes de la Sala.

Llegó el auto a este Tribunal para conocer del recurso de apelación formulado por la apoderada de la demandante, contra la decisión tomada por el Juzgado Decimotercero Laboral del Circuito de Medellín, en el auto del 25 de febrero de 2020, mediante el cual se liquidaron las costas procesales, fijando como agencias en derecho de la primera instancia, la suma de \$2'500.000.

Para la sustentación del recurso, la apoderada de la parte demandante considera: que la cifra dada es muy inferior en relación a las pretensiones reconocida en el proceso y a la duración del litigio. Que conforme al acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, se debieron calcular las mismas por el 7.5% del valor de la condena, esto quiere decir, \$3'450.000. Y que se debe tener en cuenta que el proceso tuvo una durabilidad de más de 2 años.

Una vez transcurrido el término de traslado para presentar alegatos, ninguna de las partes se pronunció al respecto.

Al respecto el Tribunal hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las expensas judiciales – entendidas éstas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las agencias en derecho – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios) hacen parte integrante de las costas procesales. Se constituyen, por tanto, en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente las agencias en derecho “representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses” y es “el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...” (C – 539 julio 28/99) (Subrayas por fuera del texto).

El artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de agencias en derecho se consultará las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si “...*éstas solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...*”.

Así pues, es perfectamente viable tasar las agencias en derecho de acuerdo con las pautas que trae el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, toda vez que en su artículo 7, es claro al indicar que “*El presente acuerdo rige a partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala*

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.”; y como se observa con el sello de apoyo judicial, el proceso fue iniciado el 02 de agosto de 2018.

Así entonces, el acuerdo antes mencionado, en su artículo 5°, numeral 1°, que compone los procesos declarativos en general, dispone:

“... En primera instancia.

a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:

- (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.*
- (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.*

b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V...”

A la par, no puede desconocerse que la normatividad aludida, establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, más no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que éstas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que, en uso de su discrecionalidad, fije un monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, y la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el máximo legal.

Descendiendo al caso de autos, encuentra esta judicatura que la gestión de la apoderada de la actora en el proceso de la referencia se circunscribió a la presentación de la demanda el 02 de agosto de 2018 y al recaudo de la prueba documental, igualmente, no sobra decir que el presente asunto en primera instancia hasta el momento de liquidarse las agencias en derecho, tuvo una duración de 1 año, 6 meses y 23 días.

Por lo anterior, si bien no se desconoce que todas las actuaciones de la parte demandante fueron diligentes, las agencias impuestas en primera instancia se compadecen con el tema debatido, pues hay que tener en cuenta que éstas se ajustan entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, como lo expresa el acuerdo en

menCIÓN, refrendando que el juez puede hacer uso de su discrecionalidad sin estar condicionado a fijar como agencias en el máximo legal.

Atendiendo tales circunstancias, este Tribunal considera pertinente **CONFIRMAR** el valor de las agencias en derecho de la primera instancia, por la suma de \$2'500.000 arrojada en primera instancia.

En conclusión y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por las razones que se han dejado consignadas.

Sin costas procesales en el recurso.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Sin costas procesales en el recurso.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° 045 del 15 de marzo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>